

C.A. de Santiago

Santiago, cinco de diciembre de dos mil veintidós.

Vistos:

Por sentencia de fecha 25 de julio del año en curso, dictada por el Quinto Tribunal de Juicio Oral de Santiago, en la causa RIT N° O-41-2021, en lo pertinente, se condenó al acusado **Mauricio Osvaldo Pavez Becerra**, a las siguientes penas y por los delitos que se indican:

a.- **Cinco años y un día** de presidio mayor en su grado mínimo, más las accesorias legales respectivas, como autor del delito de **asociación ilícita** en calidad de líder, en grado de consumado, cometido en esta ciudad, entre los años 2015 y 2018, en los términos del artículo 293 del Código Penal;

b.- **Doce años** de presidio mayor en su grado medio, más las accesorias legales correspondientes, como autor del delito reiterado de **tráfico de armas** (4), en grado de consumado, previsto y sancionado en el artículo 10° de la Ley N° 17.798 sobre control de armas, cometido en esta ciudad entre los años 2015 y 2018.

c.- **Cinco años y un día**, de presidio mayor en su grado mínimo, multa de 200 unidades tributarias mensuales y accesorias legales pertinentes, por el delito de **lavado de activos**, en grado de consumado, previsto y sancionado en el artículo 27 a) de la Ley N° 19.913, sobre Unidad de Análisis Financiero y lavado y blanqueo de activos, perpetrado en esta ciudad en el mismo período, y

d.- **Quinientos cuarenta y un día** de presidio menor en su grado medio, más las accesorias legales pertinentes, como encubridor del delito de robo con intimidación, en grado de consumado, previsto y sancionado en el artículo 436 del Código Penal, cometido en esta ciudad el día 9 de febrero de 2018.

No se le concedieron penas sustitutivas, debiendo cumplir las penas en forma efectiva, reconociéndose como abono el periodo que permaneció privado de libertad en esa causa.

Del mismo modo, en la misma sentencia, se condenó al acusado **Iván Esteban Pavez Becerra**, a las siguientes penas y por los delitos que se indican a continuación:



a.- **dos años** de presidio menor en su grado medio, más las accesorias legales correspondientes, como autor del delito de asociación ilícita en su calidad de miembro, no líder, cometido en esta ciudad entre los años 2015 y 2018, en los términos del artículo 294 del Código Penal.

b.- **Diez años y un día** de presidio mayor en su grado medio, más las accesorias legales pertinentes, en su calidad de autor del delito reiterado (2) de **tráfico de armas**, en grado de consumado, previsto y sancionado en el artículo 10° de la Ley N° 17.798 sobre control de armas, perpetrado en esta ciudad entre los años 2015 y 2018, y

c.- **Cinco años y un día**, de presidio mayor en su grado mínimo, a una multa de 200 unidades tributarias mensuales y a las accesorias legales respectivas, por el delito de **lavado de activos**, en grado de consumado, previsto y sancionado en el artículo 27 a) de la Ley N° 19.913, sobre Unidad de Análisis Financiero y lavado y blanqueo de activos, perpetrado en esta ciudad en el mismo período.

A este sentenciado tampoco se le concedieron penas sustitutivas, debiendo cumplir las penas en forma efectiva, reconociéndose como abono el periodo que permaneció privado de libertad en esa causa.

Asimismo, el fallo antes referido condenó a **Francisco Javier Contreras Quintanilla**, entre otros ilícitos, y en lo pertinente al recurso, a la pena de **cinco años y un día** de presidio mayor en su grado mínimo, más las accesorias legales pertinentes, como autor del delito de robo con intimidación, en grado de consumado, previsto y sancionado en el artículo 436 del Código Penal, cometido en esta ciudad, el 9 de febrero de 2018.

Tampoco se le concedieron penas sustitutivas, por lo que deberá cumplir las sanciones impuestas en forma efectiva, reconociendo como abono el tiempo que permaneció privado de libertad en esta causa.

La defensa de los acusados Mauricio Osvaldo Pavez Becerra e Iván Esteban Pavez Becerra dedujo recurso de nulidad, alegando para ambos solamente la causal del artículo 374 letra e), en relación con los artículos 342 letra c) y 297, todos del Código Procesal



Penal. Pide, en caso de acogerse el recurso, por la causal invocada, que el tribunal ad quem anule el juicio y la sentencia y determine el estado en que ha de quedar el procedimiento, ordenando la remisión de los autos al tribunal no inhabilitado que correspondiere para que disponga la realización de un nuevo juicio oral.

A su vez, la defensa del acusado Francisco Javier Contreras Quintanilla también interpuso recurso de nulidad, invocando tres causales. La primera es la del artículo 373 letra a) del citado Código, que fue reconducida por la Excma. Corte Suprema, mediante resolución de 28 de junio último, a la del artículo 374 letra c); la segunda, es precisamente la del artículo 374 letra c) del Código Procesal Penal y la tercera es la del artículo 374 letra e), en relación con los artículos 342 letra c) y 297, del citado Código. Solicita acoger el presente recurso, por la causal invocada y por los fundamentos de hecho y de derecho expuestos, invalidar el juicio oral y la sentencia recurrida; determinar el estado en que deba quedar el procedimiento y ordenar la remisión de los autos al tribunal no inhabilitado que corresponda para efectos que se disponga la realización de una nueva audiencia de juicio oral.

Con fecha 15 de noviembre último tuvo lugar la vista de los recursos, ocasión en que alegaron los defensores de los tres acusados, el representante del órgano persecutor y la parte querellante, Ministerio del Interior y Seguridad Pública, fijándose -por resolución de 1° de diciembre último- para el día de hoy la comunicación de la sentencia.

Considerando:

I.- En cuanto al recurso interpuesto por la defensa de los acusados Mauricio Osvaldo e Iván Esteban, ambos Pavez Becerra:

1°) La causal invocada por la defensa de los sentenciados Mauricio Osvaldo e Iván Esteban, ambos Pavez Becerra, es la del artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal, esto es haber omitido alguno de los requisitos previstos en el artículo 342 letra c) del mismo cuerpo normativo, al haberse efectuado una valoración de los medios de prueba contraria a lo establecido en el artículo 297 del citado Código.



Luego de reproducir el Hecho N° 1 descrito en el motivo séptimo del fallo, que se refiere a la asociación ilícita, indica que la regla que de valoración infringida es el principio lógico de la razón suficiente en su variante o sub principio de corroboración, al haber determinado la existencia de una asociación ilícita desde el año 2015 al año 2018, sin que existan elementos que permitan dar por establecido el elemento permanencia en el tiempo y jerarquía, sin lo cual no puede darse por configurado el tipo penal. En seguida, aborda su exposición en tres aspectos que son los siguientes: **a)** Insumo probatorio a ponderar y solvencia lógica de las ponderaciones; **b)** Análisis valorativo del Tribunal de la prueba de cargo y **c)** Déficit valorativo, en relación a los requisitos de permanencia en el tiempo y jerarquía.

Así, a continuación, en lo que atañe al primer punto, enumera la prueba que tuvo en cuenta el Tribunal para establecer el mentado ilícito de asociación ilícita. Alude a las declaraciones de los carabineros César Quintana y Cristián Contreras, quienes iniciaron una investigación en febrero de 2017 por lesiones con armas de fuego, apareciendo como involucrados una banda llamada “Los Pachuco”, a la que pertenecía Mauricio Pavez Becerra, su pareja Sussue Caro Araya y Francisco Contreras Quintanilla, haciendo vigilancia a su propiedad ubicada en Maipú; también se rastreó a Mauricio Pavez en Facebook, quien aparecía con vehículos de alta gama, algunas fotos tomadas en Estados Unidos, agregando un funcionario que un denunciante anónimo les indicó que un grupo organizado de personas, que vivía en La Farfana, internaba armas en encomiendas desde Estados Unidos, en cajas de repuestos de vehículos y artefactos eléctricos, uno de los líderes sería el “Pachuco” o el Iván, que se preocuparía de organizar el tráfico de a Chile y la comercialización en Chile, el segundo líder el “Pachuquin” o Mauri, Mauricio Pavez Becerra. Los demás se identificaron con empadronamiento de testigos, dijeron que eran personas peligrosas, notaban en ellos un enriquecimiento, circulaban en un Camaro rojo descapotable, usaban joyas, también por las redes sociales, donde se advirtió que tenían fotos en común.

También se refiere a las declaraciones prestadas por los funcionarios policiales Carlos Fuentes, Cesar Araya, Francisco



Nieto, Franco Araos, Ricardo Pavez, Alexis Fonseca, Diego Díaz, Mauro Pérez, Carolina Miranda, Carlos Riveros, Rodolfo Gramattico, Erick Morales, Luis Bravo, Mauricio Godoy, Miguel Beiza y Matías González, quienes dieron cuenta de la investigación originada en la denuncia efectuada por el Servicio Nacional de Aduanas, en relación con el envío de encomiendas desde la ciudad de Houston, Texas, EEUU, contenedoras de armas de fuego, ocultas en el interior de equipos electrónicos de gran tamaño como reproductores de DVD o radios, en la cual se trabajó con agentes reveladores, que permitieron conectar el envío de estas encomiendas con Mauricio Pavez Becerra, quien además, ya había sido investigado anteriormente por la Fiscalía Centro Norte, en el contexto del delito de tráfico ilícito de estupefacientes, en cuyo contexto se habían recopilado una serie de antecedentes probatorios, que incluían numerosos registros de intercepciones telefónicas, razón por la cual todas estas investigaciones fueron acumuladas y se desarrollaron conjuntamente.

Estos funcionarios detallaron cómo las distintas diligencias investigativas ejecutadas, principalmente por la Brigada de Crimen Organizado, les permitió advertir que los sujetos antes denunciados residían en un mismo sector de la comuna de Maipú, La Farfana, y que se habían organizado para cometer diversos tipos de delitos, en especial, el tráfico de armas, que ingresaban al país desde la ciudad de Houston, EEUU, utilizando para ello diversas vías de internación, como encomiendas de correos postal a través del aeropuerto Arturo Merino Benítez o en containers a través de barcos que arribaban al puerto de Arica, pero siempre con un mismo modus operandi, consistente en que un miembro de la agrupación viajaba y se radicaba en Houston, financiado por Mauricio Pavez Becerra, lugar donde adquiría armas de fuego de diversos calibres, las ocultaba en el interior de aparatos electrónicos de gran volumen, como radios antiguas, reproductores de DVD, juguetes, que a su vez eran escondidos en el interior de cajas de cartón para encomiendas, y las enviaba a Chile, por las vías ya mencionadas, recorrido que era permanentemente supervisado desde Chile por Mauricio Pavez, a través de diversas plataformas digitales, estableciéndose fehacientemente que esta logística estaba operativa a lo menos



desde el año 2015, oportunidad en la que Mauricio Pavez enseña a Francisco Contreras sus contactos en EEUU relativos a la adquisición de armas de fuego, materializándose en el envío de la pistola Walter, que en definitiva fue incautada por el Servicio Nacional de Aduanas en el aeropuerto de Santiago y que presentaba idéntica forma de embalaje que las restantes armas incautadas durante la investigación.

Lo anterior aparece verificado por los audios y documentos e imágenes que especialmente ayudaron a contribuir en su decisión. A continuación, señala los registros de audio más relevantes, entre los que destacan el N° 196, de 6 de marzo de 2018; N° 2027 y N° 2032, de 14 de marzo de 2018; N° 2238, de 15 de marzo de 2018; N° 3317, de 20 de marzo de 2018; N° 1678, de 22 de marzo de 2018; N° 5286, de 28 de marzo; N° 5379, de 29 de marzo de 2018; N° 289, N° 292 y N° 9098, de 17 de abril de 2018.

A lo anterior, el recurrente menciona otras pruebas documentales como tickets aéreos, comprobantes de pago de esos pasajes; información de seguimiento de encomiendas; esquema de las entradas y salidas de los imputados, que demuestra que el primero que viajó a Estados Unidos fue el acusado Mauricio Pavez.

En lo que se refiere al segundo argumento de la causal, esto es el análisis valorativo del Tribunal sobre la prueba de cargo, el recurso se limita a reproducir los motivos séptimo y noveno, en relación al Hecho N° 1, esto es el delito de asociación ilícita y la participación que le cupo a los acusados Mauricio e Iván, ambos Pavez Becerra en los delitos por los cuales fueron condenados.

2º) En lo que respecta al tercer y último fundamento de la causal, que el recurso denomina “déficit valorativo”, reitera la relevancia del principio lógico de la razón suficiente y luego reproduce parte del considerando octavo, relativo a la calificación jurídica del Hecho N° 1 como un delito de asociación ilícita. En seguida, postula su argumento central que es, a su juicio, que no se ha verificado con la prueba rendida que la supuesta asociación ilícita haya tenido comienzo desde el año 2015, lo que obsta al requisito de permanencia en el tiempo que exige este ilícito y, además, cuestiona la existencia de la organización ilícita.



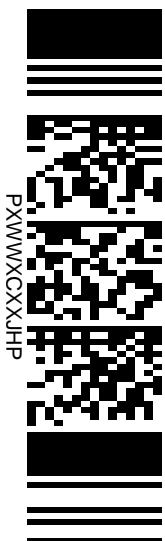
En relación con el primer obstáculo, enfatiza que Mauricio Pavez no es mencionado en relación al tráfico de armas sino hasta el año 2017, ya que el arma ingresada durante el año 2015, que dio origen a una investigación por contrabando solo puede vincularse al imputado Francisco Contreras, pero no hay forma de conectar a Mauricio Pavez en ese caso. Así esa aseveración no tiene respaldo probatorio. Tampoco hay prueba que Mauricio Pavez estuviera vinculado a la organización en el año 2016.

En cuanto al segundo tópico que reprocha el recurso, en relación a este delito, subraya que la prueba fundamental para demostrar las características y funciones de la pretendida asociación ilícita -que se deriva en los registros de audios, mas imágenes de información contenida en los teléfonos, de seguimiento de encomiendas- solo podría comprender un periodo entre el 6 de marzo al 17 de abril de 2018, lo que es insuficiente para acreditar una organización ilícita, jerarquizada, y con permanencia en el tiempo.

En conclusión, en su opinión la prueba rendida no pudo establecer la permanencia de sus defendidos en la asociación ilícita desde el año 2015, como lo sostiene el Tribunal en el motivo octavo, ni el rol que cumplían ellos en esa organización.

3º) Siguiendo el mismo esquema que ha presentado el recurso, en cuanto a los dos primeros argumentos que postula el recurso, estos no inciden en la causal alegada, pues más bien son la exposición de lo que –en concepto de la defensa- tuvo en cuenta el Tribunal para dar por establecido el delito de asociación ilícita. Como ya se dijo, incluso la defensa reproduce más de una vez el considerando octavo a este respecto, razón por lo cual resulta inoficioso ponderar aquello.

4º) Por el contrario, en lo que concierne al tercer aspecto del recurso, esto es el eventual déficit valorativo del fallo para dar por establecidas las dos circunstancias del delito de asociación ilícita que la defensa estima no están acreditadas, cabe consignar, en primer lugar, que la selección de los antecedentes probatorios que formula la defensa es del todo incompleta, omitiendo elementos de convicción relevantes que es necesario resaltar.



Así, en lo que se refiere a que no se habría establecido la intervención del acusado Mauricio Pavez Becerra en la supuesta organización ilícita desde el año 2015, como primera aproximación, es necesario destacar que es imposible separar o aislar este ilícito de los restantes por los cuales ha sido condenado. En efecto, en particular este delito está conectado con el lavado de activos, pues es obvio que la organización delictiva, se dedicaba no solo al tráfico de armas, sino también a perpetrar otros ilícitos.

Por lo mismo, entonces, tienen importancia las boletas falsas que desde el año **2015** emitió Mauricio Pavez Becerra a diferentes personas para ocultar las utilidades que percibía producto de sus actividades ilícitas, entre esas el tráfico de armas (Hecho 5.1, del Considerando séptimo); los bienes que comenzó a adquirir a nombre de su conviviente Sussue Caro Araya, comenzando por la inscripción de derechos en un inmueble en la comuna de Valparaíso, inscrita en el Registro de Propiedad del año **2015** (Hecho 5.2. N° 1, del Considerando séptimo).

También es relevante el reconocimiento del acusado Mauricio Pavez Becerra, quien admitió, al prestar declaración en estrados, que vivió en Estados Unidos, en el año 2013, regresó y volvió el 2014, que cometió ilícitos allá, estando preso, que en septiembre de 2015 se juntó allá, en una fiesta, con Francisco Contreras Quintanilla, a quien le dijo “*que trabajaran juntos*”, luego regresó a Chile en la navidad de **2015**. Ese antecedente es destacable porque el contacto con Contreras se establece allá, en Estados Unidos y en agosto de **2015** Contreras se ve involucrado en el primer ilícito de tráfico de armas (Hecho 2.1.1) del considerando séptimo. Obviamente, no puede ser una coincidencia. La asociación, entonces, ya existía a esa época.

Cierto es que los registros de audio de 2018 son elocuentes para acreditar la existencia de la asociación, pero de los mismos emergen indicios que estas personas se conocían desde hace tiempo, que había roles determinados, que Mauricio Pavez daba las órdenes y dirigía la organización, lo que permite desde luego desechar el segundo reproche que formula la defensa en esta materia.



En este orden de ideas, útil es citar a un autor que apunta a este requisito: *“Por eso el delito de asociación ilícita es independiente de los delitos, bastando que se compruebe el acuerdo de voluntades entre los componentes, en el sentido de cometer delitos determinados en cuanto ello sea posible y se presente la oportunidad.”* (Mario Ruiz Zurita, “El delito de asociación ilícita”, Ediar, 2009, pág. 77).

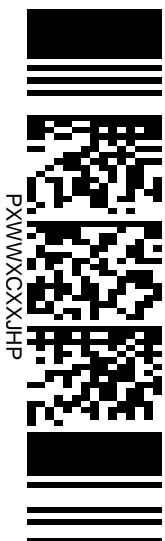
En suma, la tesis de la defensa sería válida si solo se hubiera acusado a Mauricio Pavez como autor de asociación ilícita, pero no era solo el tráfico de armas su principal objetivo, sino también la comisión de otros ilícitos; en efecto, cuando fue detenido se logró incautar un paquete de placas de patente falsas, lo que también está corroborado con los últimos registros de audio y aquello se vincula al robo de vehículos, a la receptación y a venta de vehículos robados. La asociación ilícita, entonces, se había diversificado y estaba destinada a varios ilícitos.

Por todo lo anterior, el recurso de la defensa de los acusados Mauricio e Iván, ambos Pavez Becerra, debe ser rechazado, por no configurarse la causal alegada.

II.- En cuanto al recurso interpuesto por la defensa del acusado Francisco Javier Contreras Quintanilla:

5º) En lo que concierne a la primera causal subsistente del recurso, la defensa alega la del artículo 374 letra c) del Código Procesal Penal, en relación con los artículos 306, 309, 329, 330, 331, 332, 333 y 334 del mismo cuerpo legal, esto es cuando al defensor se le hubiere impedido ejercer las facultades que la ley le otorga.

Después de reproducir, en el considerando séptimo del fallo recurrido, el *“Hecho N° 4: Robo con intimidación”*, y en el considerando octavo, la calificación jurídica de ese mismo hecho, señala que el Tribunal no permitió a la defensa la realización de un ejercicio de contrastación de los dichos de un testigo con la declaración de la víctima contenido en un informe policial confeccionado por él, impidiendo demostrar que la víctima no pudo haber reconocido a Francisco Contreras sin caer en una insalvable contradicción.

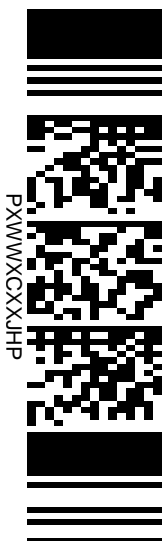


Así, en su concepto, se ha impedido a la defensa ejercer las facultades que la ley le otorga, concretamente impedir formular a los testigos preguntas tendientes a demostrar su credibilidad o falta de ella, la existencia de vínculos con algunos de los intervinientes que afectaren su imparcialidad, o algún otro defecto de idoneidad, todo previsto en el artículo 309 del Código Procesal Penal. Asimismo, se ha impedido ejercer los derechos establecidos en el artículo 329 del citado Código, esto es, la posibilidad de contrainterrogar personalmente a los testigos, confrontarlos con sus propios dichos u otras versiones de los hechos presentadas en el juicio.

En consecuencia, con lo decidido por el Tribunal se niega a la defensa ejercer sus facultades, en una hipótesis no prevista por el legislador, toda vez que el ejercicio del artículo 332 del Código procesal penal intentado por la defensa cumplía con todos los requisitos para realizarlo.

Pide acoger el presente recurso, por la causal invocada y por los fundamentos de hecho y de derecho que se expusieron, invalidar el juicio oral y la sentencia recurrida; determinar el estado en que deba quedar el procedimiento y ordenar la remisión de los autos al tribunal no inhabilitado que corresponda para efectos que se disponga la realización de una nueva audiencia de juicio oral.

6º) Previo al análisis de la causal antes referida, cabe destacar que su petición concreta no se condice con el tenor de los fundamentos y reproches que se formulan en el mismo. En efecto, pese a lo amplio de lo pretendido por el recurrente –invalidar el juicio oral y la sentencia recurrida- lo cierto es que el recurrente se limita solo a cuestionar el hecho y participación de su defendido en uno solo de los delitos por el que fue sancionado, esto es el denominado “Hecho N° 4: Robo con Intimidación”. Sus argumentos, en ambas causales subsistentes, sin embargo, se limitan solo a ese ilícito, motivo por el que, en caso alguno podría esta Corte invalidar la sentencia en la extensión solicitada, ya que no ha sido impugnada la misma en su totalidad, sino solo en parte de ella. Al parecer la defensa no ha reparado en la modificación del inciso 2° del artículo 384 del Código Procesal Penal, que permite –desde el 30 de noviembre de 2021- la nulidad parcial de la sentencia.



7º) Sin perjuicio de lo anterior, abordando la primera causal subsidiaria, esto es la del artículo 374 letra c) del Código Procesal Penal, antes aludida, en caso alguno dicha alegación podría prosperar, desde que -en primer lugar- el recurrente en parte alguna de su relato precisa la resolución que, en su concepto, le habría impedido ejercer sus facultades.

Tampoco ayuda, en este sentido la prueba que adjunta, esto es la reproducción íntegra en audio del juicio oral, pues no señala la pista precisa en que se encontraría la decisión jurisdiccional que le habría impedido ejercer las facultades que la ley le otorga.

Aún así, entendiendo que la confrontación que el Tribunal rechazó consistía en enfrentar los dichos de un testigo con la declaración de la víctima contenido en un informe policial confeccionado por él, no se dan en ese caso los supuestos legales para realizar el pretendido ejercicio.

En efecto, el artículo 332 del Código Procesal Penal permite confrontar los dichos del testigo solo con los antecedentes de la investigación que esa disposición establece, como son las declaraciones prestadas por el testigo ante el fiscal, el abogado asistente del fiscal o el juez de garantía, en su caso. De lo referido por la defensa, sin embargo, se desprende que la contrastación pretendía hacerse con un informe policial elaborado por el testigo, elemento de análisis que no está previsto como fuente de contraste, de modo tal que nada hay de irregular en la decisión del Tribunal.

A mayor abundamiento, cabe consignar que el artículo 292 del Código Procesal Penal, entre determinadas facultades que concede al juez que preside el juicio oral, menciona las de dirigir el debate, ordenar la rendición de las pruebas, exigir el cumplimiento de las solemnidades que correspondan y moderar la discusión. Es claro que al rechazar el ejercicio propuesto por el defensor el Tribunal veló por la estricta sujeción al artículo 332 citado, esto es el cumplimiento de los supuestos que ese ejercicio concede al que contra interroga.

Ergo, si durante el transcurso del juicio, durante un contra interrogatorio de la defensa, el Tribunal decidió no acceder al ejercicio de confrontación regulado en el artículo 332 precitado, porque no se ajustaba ese proceder a los supuestos normativos de



esa regla, no puede sostenerse que con ello se impide a la defensa ejercer las facultades que la ley le otorga, toda vez que ese ejercicio debe cumplir ciertos supuestos que al Tribunal corresponde revisar, para que la prueba se introduzca legalmente.

En lo que se refiere a la infracción de las demás disposiciones legales mencionadas por la defensa, no explica el recurrente cómo se infringieron, por lo que esa afirmación carece de fundamento.

En conclusión, no se advierte infracción al artículo 332 del Código Procesal Penal, ni a ninguna otra disposición legal invocada por la defensa, sino que, por el contrario, la sujeción estricta a esa normativa, motivo suficiente para desestimar esta causal.

8º) Como causal subsidiaria, la defensa del acusado Francisco Contreras Quintanilla invoca la del artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal, en relación con el artículo 342 letra c) y 297 del mismo cuerpo legal. Enuncia que, respecto del Hecho N° 4: Robo con intimidación, se configura el vicio, toda vez que hay una valoración errada de la prueba que infringe las reglas de la lógica y, en particular, el principio de razón suficiente.

Luego de reproducir nuevamente los motivos séptimo y octavo de la sentencia recurrida, en que se alude al Hecho N° 4: Robo con intimidación y su calificación jurídica, y de dar un concepto de la razón suficiente, indica que el defecto expresado es manifiesto, pues en parte alguna del fallo se articulan los antecedentes probatorios aportados a la litis para conducir a la conclusión condenatoria por este ilícito.

Señala que la conclusión carece de razonamiento previo o de explicación de su contenido, que permita ser reproducido, lo que es contrario a un proceso en que reina la presunción de inocencia, y que el estándar de condena debe ser el más alto exigible a un Estado de Derecho, ya que el sentenciador debe dar a conocer los fundamentos legales y doctrinarios de cómo alcanza la conclusión de encasillar una conducta en uno de los verbos rectores de la norma, no bastando con la explicación de haber alcanzado una decisión, de la existencia de un hecho, en base a la prueba producida, aunque sea parcialmente, si no se identifica las normas y las explicaciones de su encuadramiento. Lo anterior, se manifiesta particularmente en el razonamiento esgrimido para dar por



acreditada la existencia del delito de robo con intimidación y la participación que se atribuye a su defendido.

En otras palabras, el Tribunal omite analizar las probanzas para explicar cómo alcanzan convicción de condena, lo que se verifica al hacer irreproducible el razonamiento empleado para verificar la conclusión declarada.

9º) Contrariamente a lo señalado por el recurrente, en el motivo séptimo de la sentencia impugnada, el Tribunal valora la prueba rendida para tener por establecido el hecho N° 4 de la acusación, esto es el robo con intimidación a Pablo Maldonado. Es así que entre los elementos de juicio que menciona para tener por configurado ese hecho punible están la declaración de la funcionaria policial Solange Jiménez, quien tomó declaración a la víctima -Pablo Maldonado Correa- del robo de su vehículo Grand Cherokee, patente GKPV20, lo que ocurrió el día 9 de febrero de 2018, aproximadamente a las 23:15 horas, en la comuna de Providencia; además están las declaraciones de nueve funcionarios policiales, que indicaron haber efectuado vigilancia discreta en el domicilio del acusado, habiendo tomado fotografías de un vehículo Grand Cherokee, que según los policías tenía la patente GKPV20, lo que sucedió el 11 de febrero de ese año; luego vieron el mismo vehículo, con una patente nueva, GPDK88; se encuentran también el registro de audio de una interceptación telefónica en que el acusado Francisco Contreras le cuenta a un tercero, Luis Palacios, como efectuó el robo de la camioneta oscura; otro audio en que Francisco Contreras; otro registro de audio, también interceptado, en que el acusado Contreras conversa con Mauricio Pavez sobre la oferta por la camioneta por \$ 2.500.000 y como distribuirían el dinero; otros registros de interceptaciones telefónicas del teléfono de Contreras -15 y 16 de febrero de 2018- en que un tal “Bladi” le avisa que tiene un cliente para la compra del Cherokee y otro en que Mauricio Pavez le cuenta que compró unas patentes para el vehículo Cherokee.

Ese cúmulo de antecedentes, más el reconocimiento fotográfico que hizo la víctima del acusado Francisco Contreras Quintanilla como una de los dos personas que el día de los hechos lo amenazó con un arma aparentemente de fuego y le sustrajo su



vehículo, también acredita la participación del mentado acusado en este ilícito.

Por último, no es efectivo que la sentencia omita referirse a la teoría alternativa de la defensa, pues en el mismo considerando séptimo, el Tribunal se hace cargo de esa tesis, desechándola, por estar desacreditada con la prueba rendida.

10°) En consecuencia, la sentencia, tanto en el motivo séptimo, como en el octavo, da fundamentos suficientes para tener por establecido el hecho que configura el delito de robo con intimidación a Pablo Maldonado Correa, así como la participación como autor que le cupo a éste imputado en ese delito, de modo tal que debe desestimarse la causal subsidiaria, por clara falta de fundamento.

En tal virtud, desechadas sendas causales, el recurso de nulidad interpuesto por la defensa del acusado Francisco Contreras Quintanilla debe ser rechazado.

Por los fundamentos anteriores, más lo previsto en los artículos 372, 378 y 384 del Código Procesal Penal, se **rechazan** los recursos de nulidad deducidos por las defensas de los sentenciados Mauricio Osvaldo Pavez Becerra, Iván Esteban Pavez Becerra y Francisco Javier Contreras Quintanilla, en contra de la sentencia de veinticinco de julio del año dos mil veintidós, dictada en la causa RIT N° O-41-2021, por el Quinto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago.

Regístrese y comuníquese.

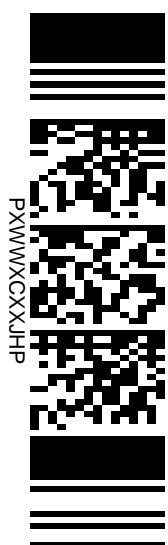
Redacción del ministro Tomás Gray.

N°Penal-4434-2022.

Pronunciada por la Novena Sala, presidida por la ministra señora Graciela Gómez Quiral, e integrada, además, por el ministro señor Tomás Gray Gariazzo y el abogado integrante señor Eduardo Jequier Lehuedé.

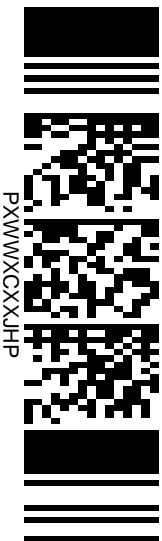
En Santiago, cinco de diciembre de dos mil veintidós, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.





Pronunciado por la Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por los Ministros (as) Graciela Gomez Q., Tomas Gray G. y Abogado Integrante Eduardo Jequier L. Santiago, cinco de diciembre de dos mil veintidós.

En Santiago, a cinco de diciembre de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl> o en la tramitación de la causa.
A contar del 11 de Septiembre de 2022, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>.